



Señores

Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cali
E.S.D.

Asunto : ACCIÓN DE TUTELA
Accionante : JAIME DIALBERTO CANDELO CABALLERO
Accionado : INTENDENCIA REGIONAL - SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
Solicitud:: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA EL AUTO 2023-03-008732 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2023.

JULIAN DAVID AGUDELO PATIÑO, identificada con la cédula de ciudadanía 1.151.943.015 y portador de la T.P. 247.962 del C.S. de la J., actuando como abogado de la sociedad Agudelo Abogados Asociados S.A.S., sociedad que funge como apoderada especial del señor **JAIME DIALBERTO CANDELO CABALLERO**, acudo a su Despacho en ejercicio de la **ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL** consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política en contra de la **INTENDENCIA REGIONAL CALI DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES**, por las violaciones procesales cometidas en el Auto 2023-03-008732 de fecha 18 de octubre de 2023 a través del cual se admitió a la sociedad PROMOTORA AIKI S.A.S. a un proceso de reorganización empresarial. Lo anterior lo fundamento en lo siguiente:

I. COMPETENCIA PARA CONOCER LA TUTELA- TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE CALI

Sea pertinente indicar que, esta acción de tutela promovida en contra del Auto 2023-03-008732 de fecha 18 de octubre de 2023, proferido por la Intendencia Regional Cali de la Superintendencia de Sociedades es en virtud de sus **funciones jurisdiccionales**, dentro del proceso de la sociedad **PROMOTORA AIKI S.A.S.**

Por lo anterior, en materia de conocimiento de acciones de tutela, el Decreto 333 de fecha 6 de abril de 2021, dispuso:

"Artículo 2.2.3.1.2.1. Reparto de la acción de tutela. Para los efectos previstos en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, conocerán de la acción de tutela, a prevención, los jueces con jurisdicción donde ocurriere la violación o la amenaza que motivare la presentación de la solicitud o donde se produjeran sus efectos, conforme a las siguientes reglas:

(...)

*10. Las acciones de tutela **dirigidas contra autoridades administrativas en ejercicio de funciones jurisdiccionales**, conforme al artículo 116 de la Constitución Política, serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial." Negrillas fuera de texto*



Es así, como en los términos del parágrafo primero del artículo primero del Decreto 333 de fecha 6 de abril de 2021, si el Juez ante el que se presenta la acción de tutela, no es el de conocimiento, deberá enviarla a más tardar al día siguiente de su recibo, previa comunicación a los interesados.

En este sentido, teniendo en cuenta que la acción de tutela promovida contra la Intendencia Regional Cali de la Superintendencia de Sociedades es en virtud de sus **funciones jurisdiccionales** conferidas por la Ley, su conocimiento será del **Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cali (reparto).**

II. ANTECEDENTES

1. El día 11 de enero de 2023, en radicación 2023-01-007810, como apoderado especial del señor JAIME DIALBERTO CANDELO CABALLERO, quien es acreedor de la sociedad PROMOTORA AIKI S.A.S., identificada NIT 900.178.588 8, solicité que se declarara la concurrencia de los supuestos de insolvencia de esa sociedad y se decretara el inicio del proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006.
2. No teniendo información o respuesta sobre la anterior solicitud, el día 6 de julio de 2023 presentamos una acción de tutela en busca que se garantizaran los derechos al debido proceso y acceso a la administración de justicia por mora judicial. La cual, fue notificada a la Intendencia Regional Cali el día 7 de julio de 2023 en radicación 2023-01-567007.
3. Por lo anterior, en Oficio 2023-03-005202 de fecha 11 de julio de 2023, la Intendencia Regional Cali de la Superintendencia de Sociedades, contestó a la acción de tutela indicando lo siguiente en los hechos 3 y 4:
 - i. Que el día 17 de marzo de 2023, en Oficio 2023-03-002050 se requirió a la sociedad Promotora Aiki S.A.S. para que, en un término de 30 días hábiles, aportara la información y los documentos exigidos en la Ley para analizar si procede iniciar un proceso de reorganización, en los términos del artículo 14 de la Ley 1116 de 2006.
 - ii. Que el Oficio tiene prueba de entrega en los radicados 2023-03-002067 y 2023-03-002068 de esa misma fecha.
 - iii. Que el término de los 30 días hábiles se venció el 4 de mayo de 2023.
 - iv. Que teniendo en cuenta que de conformidad a lo estipulado en el inciso quinto del artículo 14 de la Ley 1116 de 2006, en Oficio 2023-03-005173 de fecha 10 de julio de 2023, se requirió por segunda vez a la sociedad PROMOTORA AIKI S.A.S., otorgándole un término de diez (10) días hábiles, **advirtiéndole al representante legal de la sociedad que, de no cumplir con el requerimiento en la oportunidad señalada, se ordenaría la apertura del proceso de liquidación judicial** o se ordenaría la remoción inmediata de los administradores de acuerdo con la norma.



- v. Que el anterior Oficio fue enviado por correo certificado el día 11 de julio de 2023, tal como consta en los radicados 2023-03-005182 y 2023-03-5183 de la misma fecha.
4. Para este momento si bien el aparato judicial se movió como consecuencia de nuestra solicitud de inicio de proceso de **insolvencia empresarial como acreedor**, el oficio 2023-03-005173 de fecha 10 de julio de 2023 que daba el último plazo para contestar a los requerimientos realizados por el Juez del Concurso y que de lo contrario daría inicio a un proceso de liquidación judicial o la remoción de los administradores, trajo como consecuencia que la sociedad PROMOTORA AIKI S.A.S., presentara por el MODULO MI, que es el canal de radicación de solicitudes de admisión a un proceso de insolvencia, una solicitud de inicio de proceso de reorganización empresarial.
5. En memorial 2023-01-599388 de fecha 25 de julio de 2023, la sociedad PROMOTORA AIKI S.A.S. a través del **aplicativo MI**, presentó la información requerida para el estudio de una solicitud de inicio del proceso de reorganización, con la información financiera con corte a 30 de junio de 2023. Cabe mencionar, que esta presentación la hizo durante el plazo de 10 días otorgado en el Oficio 2023-03-005173 de fecha 10 de julio de 2023.
6. Así las cosas, como la presentación de la solicitud de insolvencia radicada el 30 de junio de 2023 se presentó dentro del término otorgado en el Oficio de fecha 10 de julio de 2023, la Juez del Concurso la tomó como una contestación en término y profirió el Oficio 2023-03-007091 de fecha 30 de agosto de 2023.
7. En Oficio 2023-03-007091 de fecha 30 de agosto de 2023, la Intendencia Regional de Cali, en los términos del artículo 14 de la Ley 1116 de 2006, manifestó que la información presentada el 25 de julio de 2023, no estaba completa y requirió a la sociedad PROMOTORA AIKI S.A.S., para que complementara la información presentada, para lo cual, le concedió un plazo de diez (10) días hábiles siguientes a la recepción del oficio.
8. Cabe mencionar que el requerimiento del 30 de agosto de 2023, **sería el tercero realizado** por la Intendencia Regional Cali, partiendo del hecho que el aparato judicial para la admisión de la sociedad PROMOTORA AIKI S.A.S. inició con nuestra solicitud a un proceso de reorganización de fecha 11 de enero de 2023.
9. Para este punto, si bien no es un hecho, valga la pena resaltar que el artículo 14 de la Ley de la 1116 de 2006, indica lo siguiente frente al trámite de una solicitud de insolvencia presentada como acreedor:

“ARTÍCULO 14. ADMISIÓN O RECHAZO DE LA SOLICITUD DE INICIO DEL PROCESO.

(...)



*Si la solicitud es presentada por acreedores la autoridad competente **requerirá al deudor** para que, dentro de los treinta (30) días siguientes presente los documentos exigidos en la ley.*

*Si la información allegada por el deudor no cumple dichos requisitos **se le requerirá** para que dentro de los diez (10) días siguientes los allegue al proceso. **Si este requerimiento no se cumple, se ordenará la apertura del proceso de liquidación judicial** u ordenará la remoción inmediata de los administradores.”*

Así las cosas, cuando la solicitud de insolvencia empresarial es **presentada por un acreedor**, como para el caso en concreto ocurre, la norma solo establece **dos requerimientos** para decidir sobre la insolvencia empresarial del deudor, sea una reorganización o una liquidación judicial. Para el caso que nos ocupa, se realizaron **3 requerimientos**, siendo así evidente la contravención a la norma.

Lo anterior, partiendo del hecho que la solicitud presentada por el MI el día 25 de julio de 2023 por la sociedad, no fue tratada por la Intendencia Regional de Cali como una solicitud inicial e independiente de reorganización, sino que fue tomada por ese Despacho como una contestación al segundo requerimiento realizado el día 10 de julio de 2023, que valga la pena resaltar, **en ese requerimiento se advirtió por parte del Despacho que sino contestaban sería declarada la liquidación judicial tal como indica el artículo 14 de la Ley 1116 de 2006.**

10. No obstante, de la consideración anterior, a través del módulo de insolvencia- MI, bajo radicado 2023-01-740795 de fecha 13 de septiembre de 2023, la sociedad PROMOTORA AIKI S.A.S., dio respuesta al **tercer requerimiento** efectuado por la Intendencia Regional de Cali el día 30 de agosto de 2023, complementando la información presentada el día 25 de julio de 2023.
11. Por lo anterior, la Intendencia Regional, teniendo por contestado en término el requerimiento del Oficio de fecha 30 de agosto de 2023, procedió al estudio de los documentos y resolvió en el Auto 2023-03-008732 de fecha 18 de octubre de 2023, admitir a la sociedad PROMOTORA AIKI S.A.S. al proceso de reorganización empresarial.
12. Es claro, que la Juez del Concurso sobrepasando lo indicado por el artículo 14 de la Ley 1116 de 2006, sobre el proceso que debe seguir para la admisión a un proceso de insolvencia propuesto por un acreedor, con base en el numeral 11 del artículo 5 de la Ley 1116 de 2006, que indica que el Juez del Concurso tiene todas las atribuciones suficientes para dirigir el proceso y lograr que se cumplan las finalidades del mismo, buscó justificar **la violación a la Ley.**

No obstante, el Despacho pasó por alto que las atribuciones que tiene el Juez para la dirección de un proceso no pueden estar por encima de la Ley, porque como operador judicial tiene la obligación de aplicar la ley y dictar las



providencias dentro de los términos legales tal como lo indica el numeral 8 del artículo 42 del Código General del Proceso.

En caso de cumplir estos presupuestos, podríamos estar ante un riesgo de existencia de inseguridad jurídica para los usuarios de la justicia, en el entendido de que, si no podemos tener la seguridad que los jueces apliquen el procedimiento establecido para nuestras peticiones en la Ley, porque a mejor consideración del Juez, el proceso se deba surtir de manera diferente lo establecido en la norma bajo su deber de dirección del proceso u otorgando más prerrogativas a una parte del proceso de las que tiene establecida la Ley.

13. Como parte del actuar en el proceso, presentamos tres solicitudes de control de legalidad al procedimiento que estaba realizando la Intendencia Regional Cali, con relación al trámite de la solicitud como acreedor y la combinación que hizo con la solicitud radicada por el módulo de insolvencia MI por parte de PROMOTORA AIKI S.A.S. Estas solicitudes fueron las siguientes:

- En memorial 2023-01-575470 de fecha 13 de julio de 2023, solicitamos que se le hiciera un control de legalidad al trámite que adelantó la Intendencia Regional Cali, con la solicitud presentada como acreedor de enero de 2023, toda vez que, apartándose de antecedentes que la propia Intendencia Regional Cali había resuelto, no decretó la liquidación judicial de PROMOTORA AIKI S.A.S., por no haber contestado en el primer requerimiento de 30 días otorgado con base en el artículo 14 de la Ley 1116 de 2006.
- En memorial 2023-01-647370 de fecha 14 de agosto de 2023, se reiteró la solicitud de control de legalidad y la apertura del proceso de liquidación judicial de la sociedad PROMOTORA AIKI S.A.S.
- En memorial 2023-01-771749 de fecha 26 de septiembre de 2023, nuevamente se reiteró la solicitud de control de legalidad y apertura del proceso de liquidación judicial de la sociedad PROMOTORA AIKI S.A.S.

14. Para este momento, habiéndose presentado 3 solicitudes de control de legalidad al trámite que estaba adelantando la Intendencia Regional Cali, con mi solicitud como acreedor y la combinación que hizo con la solicitud radicada con el módulo de insolvencia MI, se profirió el Auto 2023-03-008732 de fecha 18 de octubre de 2023, en el cual, si bien se hizo alusión a la solicitud de insolvencia como acreedor, no se resolvió en ninguno de sus partes sobre la solicitud de mi prohiado, ni se hizo mención a los 3 escritos de control de legalidad que fueron propuestos.

15. Cabe mencionar que, no había otro momento procesal para resolver mi solicitud de inicio del proceso de insolvencia como acreedor como los controles de legalidad propuestos, más que en el Auto de inicio del proceso, pero el Auto de fecha 18 de octubre de 2023 en su parte considerativa no se pronunció en lo



absoluto por las peticiones anteriormente mencionadas, a pesar de que la solicitud como acreedor fue nombrada en los antecedentes del Auto.

16. Lo anterior, trajo como consecuencia que solicitáramos en memorial 2023-01-853726 de fecha 25 de octubre de 2023, una aclaración y adición al Auto 2023-03-008732 de fecha 18 de octubre de 2023, para que primero resolviera los controles de legalidad propuestos y segundo aclarara si la admisión al proceso de reorganización de la sociedad PROMOTORA AIKI S.A.S., se había dado como consecuencia de nuestra solicitud como acreedor.
17. Lo anterior, era de vital importancia para determinar dos escenarios:
 - i. Si el inicio del proceso de reorganización había sido como consecuencia de nuestra solicitud como acreedor, eso indicaría que en efecto existió una violación al artículo 14 de la Ley 1116 de 2006, y en vez de realizar dos requerimientos la Juez realizó 3 requerimientos o,
 - ii. Si el inicio del proceso de reorganización fue como consecuencia de la solicitud radicada por la sociedad en el Módulo MI el día 25 de julio de 2023 sin tener en cuenta mis solicitudes, entonces si bien se había cumplido con el procedimiento establecido en el artículo 14 haciendo 2 requerimientos, no habían resuelto mi solicitud como acreedor presentada desde el 9 de enero de 2023, situación que también era gravosa porque nosotros habíamos iniciado con el movimiento del aparato judicial primero y me estarían violando mi debido proceso como parte.
18. En consecuencia, en Auto 2024-03-000353 de fecha 30 de enero de 2024, la Intendencia Regional Cali resolvió rechazar las solicitudes de aclaración y adición propuestas, indicando varias cosas en la parte considerativa de la providencia que vale la pena resaltar:
 - i. En el numeral 3 de la parte considerativa, el Despacho indicó que en efecto la admisión al proceso de reorganización de la sociedad PROMOTORA AIKI S.A.S., que se resolvió en el Auto 2023-03-008732 de fecha 18 de octubre de 2023, se originó como consecuencia de la solicitud realizada por el acreedor a través de su apoderado.
 - ii. Que razón por la cual, no nos asistía la razón cuando indicábamos que existieron dos solicitudes de admisión al proceso de reorganización empresarial de la sociedad, una por acreedor y otra por el deudor.
 - iii. Que no existía omisión alguna por parte del operador judicial en resolver sobre los 3 controles de legalidad propuestos que tenían como finalidad que el Despacho determinara la liquidación judicial por la no contestación del primer oficio de requerimiento, porque al haberse verificado los



requisitos para la admisión al proceso de reorganización se constituía suficiente argumento contra esa pretensión.

- iv. Finalmente, que los precedentes indicados por nosotros en los controles de legalidad donde luego del primer requerimiento se decretaron la liquidación judicial de la sociedad no tenía aplicación en éste asunto, porque no había línea de decisión uniformes sobre esta materia que obligaran a adoptar un único criterio interpretativo del artículo 14 de la Ley 1116 de 2006, por lo que la razón de fondo sobre la cual se cimienta el inicio del trámite concursal, es la verificación de cumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha según la información financiera y contable del deudor, aunado a reglas superiores como la primacía del derecho sustancial sobre el formal.
19. Por lo que desde ya, si bien esto no es un hecho si es una consideración que rebate los argumentos presentados por la Intendencia Regional en las consideraciones de Auto:
- i. Al haber aceptado en la providencia que el inicio del proceso de reorganización de la sociedad PROMOTORA AIKI S.A.S. fue consecuencia de la solicitud presentada como acreedor, confirma que el Despacho violó el artículo 14 **al no limitarse a realizar 2 requerimientos como indica la norma, sino 3.**

De hecho, vale la pena resaltar que otorgarles a unos deudores dos requerimientos como dice la norma y a otros cuatro requerimientos, violaría la igualdad en la aplicación de la Ley para todos los sujetos que pretendan acceder a la administración de justicia.

- ii. Que la Juez del Concurso confirmó que todo se llevó por un solo trámite, y que el mismo desconoció lo indicado en su segundo Oficio de fecha 10 de julio de 2023, donde le advirtió a la sociedad que de no contestar con el trámite se decretaría la liquidación judicial en aplicación del artículo 14.
- iii. Cabe mencionar en este punto que, si para la Juez del Concurso el criterio interpretativo del artículo 14 de la Ley 1116 de 2006, debía ser diferente en este caso en concreto, lo mínimo para entender resueltos los controles de legalidad en el auto de admisión, habría sido que se hubiese sustentado en la parte considerativa esas razones, situación que no ocurrió como se observa en el auto de admisión de fecha 18 de octubre, no obstante, 3 peticiones no fueron resueltas y este acreedor debe entender que por la mera admisión al trámite se resolvieron sin explicación alguna o sin hacer mención a estas en ese auto, se encuentran resueltos.
- iv. Lo anterior, cobra verdadera importancia porque no existe seguridad jurídica para el acreedor ni respecto a la aplicación de la norma ni respecto a los antecedentes de la propia intendencia en asuntos similares o iguales, con la gravedad que el Despacho no motiva sus providencias para indicar las



razones del porque aplicó de manera diferente el artículo 14 respecto a los requerimientos y respecto a los efectos.

20. Por todos los anteriores hechos, es claro que el Auto 2023-03-008732 de fecha 18 de octubre de 2023, contra el cual se presenta esta acción de tutela por las vías de hecho que a continuación se procederá a explicar, no solo fue el resultado de la violación a una norma y a mi seguridad jurídica, sino que además careció de motivación y no resolvió 3 solicitudes de control de legalidad presentados.

III. SOBRE LA PROCEDENCIA DE UNA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL.

En principio, es pertinente resaltar que esta acción de tutela busca que se ordene revocar el Auto 2023-03-008732 de fecha 18 de octubre de 2023, proferido por la Intendencia Regional de Cali de la Superintendencia de Sociedades, para que el Juez concursal decrete el inicio del proceso de liquidación judicial de la sociedad, en los términos del artículo 14 de la Ley 1116 de 2006.

Así las cosas, nos debemos dirigir a lo manifestado por la Corte Constitución en sus diferentes pronunciamientos sobre la **procedencia excepcional** de la acción de tutela contra providencia judicial.

Tal como se manifestó en la Sentencia SU-128 de 2021, la posibilidad excepcional de presentar acciones de tutela contra providencia judicial es una cuestión que ha sido abordada por la Corte Constitucional desde inicios. Por lo anterior en Sentencia C-543 de 1992, la Corte indicó que el amparo de tutela no es procedente contra las decisiones de los jueces por ser contrario a los principios constitucionales de seguridad jurídica y autonomía e independencia de la administración de justicia. No obstante, **la acción de tutela puede proceder excepcionalmente frente a “vías de hecho judicial” o “actuaciones arbitrarias imputables al funcionario judicial que desconozcan o amenacen derechos fundamentales”.**

Sin embargo, la doctrina sobre las ***“vías de hecho judicial”*** fue progresivamente reelaborada por la jurisprudencia constitucional debido a su vaguedad para interpretar los escenarios que hacían procedente la tutela contra providencia judiciales. Por lo anterior, la Corte observó que los autos y sentencias podían ser atacadas por causa de otros defectos adicionales, que no provenían de una actuación arbitraria y caprichosa del juez. De esta manera, reemplazó la noción de ***“vía de hecho”*** por el de ***“causales generales y específicas de procedencia”***¹

Por lo anterior, en Sentencia C-590 de 2005, la Sala Plena de la Corte Constitucional, sistematizó los requisitos de procedencia de la tutela cuando la amenaza o violencia de los derechos proviene de una decisión judicial. El fallo,

¹ Sentencia T.217 DE 2010- Corte Constitucional



diferenció entre **“requisitos de carácter general que habilitan la interposición de la tutela”** y otros de **“carácter específico que tocan la procedencia misma del amparo una vez interpuesta”**.

Los **requisitos generales**, son presupuestos cuyo completo cumplimiento es una condición indispensable para que el juez de tutela pueda entrar a valorar de fondo el asunto puesto en su conocimiento. Mientras que los **requisitos específicos**, corresponden puntualmente a los vicios o defectos presentes en la decisión judicial y que constituyen la causa de la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales.²

Por lo anterior, para que una decisión judicial pueda ser revisada en sede de tutela, es necesario que previamente cumpla con **todos** los siguientes requisitos generales, que se explicaran a partir del caso de marras. Veamos:

1. **Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional, porque el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional, so pena de involucrarse en asuntos que corresponden definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, tendría el juez de tutela que indicar con toda claridad y de forma expresa por qué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.**

La relevancia constitucional en este caso se evidencia en la violación al debido proceso estipulado en el artículo 29 de la Constitución Política, que consagra que este deberá ser aplicado a toda clase de actuaciones judiciales, por lo que todos deberán ser juzgados conforme a las leyes preexistentes, ante el Juez competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.

Lo anterior, se vio probado en los hechos donde se puede dilucidar que la Intendencia Regional Cali, en lugar de aplicar de manera estricta el artículo 14 de la Ley 1116 de 2006, le otorgó más términos a la sociedad Promotora Aiki S.A.S. de lo contemplado en esa norma para contestar al requerimiento antes de decretar la liquidación judicial de esa sociedad como correspondía.

Pero no solo en esa equivocada aplicación de la norma, se vislumbra la violación al debido proceso, sino en la resolución a los 3 controles de legalidad propuestos por nosotros, cuando se apartó de los antecedentes judiciales que sin explicación alguna, esa misma Intendencia Regional había resuelto en el pasado en casos iguales, lo cual solo genera una inseguridad jurídica que no debe ser trasladada al usuario de la función judicial, porque si bien los operadores judiciales se pueden apartar de los precedentes, las providencias deben ser motivadas para que no exista una violación al debido proceso.

² Sentencia SU-128 de 2021.



2. Que se haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada.

Para este caso, se agotaron todos los medios de defensa que teníamos, contra el Auto 2023-03-008732 de fecha 18 de octubre de 2023, en memorial 2023-01-853726 de fecha 25 de octubre de 2023, presentamos una aclaración y adición al Auto, para que primero resolviera los controles de legalidad propuestos y segundo aclarara si la admisión al proceso de reorganización de la sociedad PROMOTORA AIKI S.A.S., se había dado como consecuencia de nuestra solicitud como acreedor.

Por lo anterior, en Auto 2024-03-000353 de fecha 30 de enero de 2024, como mencionamos en los hechos, la Intendencia Regional de Cali resolvió la solicitud de aclaración y adición, lo cual nos deja sin ningún otro mecanismo de defensa en el proceso para evitar la vía de hecho, entendiendo la improcedencia de cualquier otro recurso, de conformidad con el artículo 18 de la Ley 1116 de 2006 que establece que, la providencia que decreta el inicio de un proceso de reorganización no es susceptible de ningún recurso.

3. Que se cumpla el requisito de inmediatez, esto es, que la acción de tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcional a partir del hecho que originó la vulneración.

Frente a la inmediatez en la presentación de la acción constitucional, debemos aclarar que si bien la misma se presenta hasta el día de hoy, es relevante recordar que el Auto objeto de reproche de fecha 18 de octubre de 2023 tuvo una solicitud de adición y aclaración para agotar todos los medios de defensa y solo hasta el día 30 de enero de 2024 fue resuelto, por lo que solo ha pasado un mes desde que se profirió la última providencia que nos habilitó la posibilidad de presentar esta acción constitucional.

4. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe comprobarse que esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.

Esta acción de tutela se presenta contra el Auto 2023-03-008732 de fecha 18 de octubre de 2023, en el cual se cometió un groso error procesal, como es el otorgamiento de términos a la sociedad Promotora Aiki S.A. que no tiene contemplado el artículo 14 de la Ley 1116 de 2006, con lo cual, se le concedió beneficios que no ha tenido otras sociedades y evitó que se decretara en derecho lo que procedía que es la liquidación judicial de la sociedad.

Este proceder afecta los derechos de mi prohijado como parte actora, porque no solo debimos resistir que la Juez del Concurso se tomara 10 meses para resolver de fondo la petición de insolvencia empresarial presentada en enero de 2023, sino que adicionalmente luego de esperar todo ese tiempo y que el incumplimiento a mi obligación aumentara, no se decretó la liquidación judicial de la sociedad como en derecho correspondía, sino que se le dio 2 oportunidades que no establece la Ley a



la sociedad Promotora Aiki S.A.S. para que contestara a un requerimiento y alargó el tiempo para resolver este asunto de fondo. En pocas palabras, la sociedad conto con un término de más de 10 meses para reunir las piezas documentales que permitieran un concurso recuperatorio, en desmedro de todos los acreedores de la concursada.

5. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto hubiese sido posible.

Es claro que como parte actora identificamos todos los hechos y derechos vulnerados no solo en ese acápite de esta acción de tutela, sino en todos los escritos presentados a la Intendencia Regional, que motivaron las respuestas recopiladas por el juez del concurso en donde se configura la violación a la ley procesal que se intentó justificar con las finalidades de la ley de insolvencia y la primacía de la ley sustancial.

6. Que no se trate de sentencia de tutela.

Por último, esta acción de tutela no se presenta contra una sentencia de tutela, por lo que cumplimos con el último requisito general para interponer esta acción.

Después de aclarar el cumplimiento de los requisitos generales de la acción de tutela por vía de hecho, es pertinente aunar en los requisitos específicos, que con el cumplimiento de alguno según la Sentencia SU 128 de 2021, faculta a las partes a presentar una acción de tutela contra una providencia judicial:

1. **Defecto orgánico**, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece absolutamente, de competencia para ellos.
2. **Defecto procedimental absoluto**, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
3. **Defecto fáctico**, que surge cuando el Juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
4. **Defecto material o sustantivo**, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
5. **Error inducido**, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.



6. **Decisión sin motivación**, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad en su órbita funcional.

7. **Desconocimiento del precedente.**

8. **Violación directa de la Constitución.**

Para el caso en concreto, el Auto 2023-03-008732 de fecha 18 de octubre de 2023 está incurso a **un defecto procedimental absoluto, Decisión sin motivación y violación directa de la constitución**, como procederemos a observar:

IV. DEL DEFECTO PROCEDIMENTAL ABSOLUTO

La Corte en la Sentencia SU 128 de 2021, estableció que el defecto procedimental absoluto es aquel que se origina cuando el Juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

Para el caso en concreto, la Intendencia Regional Cali se apartó de manera absoluta del procedimiento establecido en el artículo 14 de la Ley 1116 de 2006, cuando decidió que en el trámite de petición de inicio de un proceso de insolvencia empresarial presentada como acreedor, se le hicieran **3 requerimientos** a la sociedad Promotora Aiki S.A., **cuando la norma solo establece 2.**

Por lo que es oportuno, volver a realizar un recuento de los hechos para observar donde se incurrió en el defecto procedimental. Veamos.

El día 11 de enero de 2023, en radicación 2023-01-007810, como apoderado especial del señor JAIME DIALBERTO CANDELO CABALLERO, quien es acreedor de la sociedad PROMOTORA AIKI S.A.S., identificada NIT 900.178.588-8, solicitó que se declarara la concurrencia de los supuestos de insolvencia de esa sociedad y se decretara el inicio del proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006.

En Oficio 2023-03-002050 de fecha 17 de marzo, se requirió a la sociedad Promotora Aiki S.A.S. para que, en un término de 30 días hábiles, aportara la información y los documentos exigidos en la Ley para analizar si procede iniciar un proceso de reorganización, en los términos del artículo 14 de la Ley 1116 de 2006.

“Si la solicitud es presentada por acreedores la autoridad competente requerirá al deudor para que, dentro de los treinta (30) días siguientes presente los documentos exigidos en la ley.”

Que el Oficio tiene prueba de entrega en los radicados 2023-03-002067 y 2023-03-002068 de esa misma fecha, lo cual denota que el término de los 30 días hábiles



se vencía el 4 de mayo de 2023, fecha para la cual la Promotora Aiki no contestó al requerimiento, tal como consta en el expediente.

Así las cosas, es oportuno traer a colación el último inciso del artículo 14:

*Si la información allegada por el deudor no cumple dichos requisitos **se le requerirá** para que dentro de los diez (10) días siguientes los allegue al proceso. **Si este requerimiento no se cumple, se ordenará la apertura del proceso de liquidación judicial** u ordenará la remoción inmediata de los administradores.”*

No habiendo aportado documentos en esos 30 días por parte de la sociedad Promotora Aiki S.A.S., la Intendencia Regional Cali decidió proferir el Oficio 2023-03-005173 de fecha 10 de julio de 2023, **otorgándole un término de diez (10) días hábiles**, para que presentara los documentos exigidos en la Ley, advirtiéndole al representante legal de la sociedad que, de no cumplir con ese requerimiento en la oportunidad señalada, se ordenaría la apertura del proceso de liquidación judicial o se ordenaría la remoción inmediata de los administradores de acuerdo con la norma.

En este punto, es importante señalar que el **primer error procedimental** que comete la Intendencia Regional Cali es emitir ese segundo oficio otorgando esos 10 días, por lo que es pertinente traer a colación nuevamente la norma:

*“(…)Si la solicitud es presentada por **acreedores la autoridad competente requerirá al deudor para que,** dentro de los treinta (30) días siguientes presente los documentos exigidos en la ley.*

Si la información allegada por el deudor no cumple dichos requisitos se le requerirá para que dentro de los diez (10) días siguientes los allegue al proceso. Si este requerimiento no se cumple, se ordenará la apertura del proceso de liquidación judicial u ordenará la remoción inmediata de los administradores.”

La norma indica que, si la información allegada durante los 30 días otorgados en el primer requerimiento no cumple con los requisitos de ley, se requerirá por un término de 10 días para que allegue nuevamente los documentos al proceso de manera correcta.

Pero es importante resaltar que el segundo inciso tiene una condición para realizar el segundo requerimiento de 10 días, y es que se hubiese presentado información pero que esta no cumpliera con los requerimientos.

La norma, no tiene como condición para el segundo requerimiento de los 10 días, si la sociedad no contesta al requerimiento y, por ende, no presenta documentos, poder tener esta posibilidad de requerimiento, lo que prevee la norma, es que este requerimiento será emitido cuando durante el primer requerimiento de 30 días la sociedad presentó información, pero esta no cumple con todos los requisitos.



La postura de impartir liquidación si no se aportan documentos, fue aplicado por la Intendencia Regional de Cali en tres casos que tienen como antecedentes y que procederemos a manifestarlos:

- **PRIMERAUTOS S.A.:** Auto 2019-03-014624 de fecha 30 de septiembre de 2019, en el cual, tal como consta en el acápite de los antecedentes y en el numeral 2 de la parte considerativa, solo se realizó el requerimiento de los 30 días hábiles del inciso 4 del artículo 14, porque el representante legal de la sociedad no dio respuesta al requerimiento 2019-03-001487.
- **RAMIREZ DAZA Y COMPAÑÍA LTDA FERRETERIA PROGRESEMOS:** Auto 2019-03- 014627 de fecha 30 de septiembre de 2019, en el cual, tal como consta en el acápite de los antecedentes y en el numeral 2 de la parte considerativa, solo se realizó el requerimiento de los 30 días hábiles del inciso 4 del artículo 14, porque el representante legal de la sociedad no dio respuesta al requerimiento 2019-03-000762
- **ORGANIZACIÓN EDUARDO GOMEZ SUCESORES Y CIA S.A.S.:** Auto 2019-03-014628 de fecha 30 de septiembre de 2019, en el cual, tal como consta en el acápite de los antecedentes y en el numeral 2 de la parte considerativa, solo se realizó el requerimiento de los 30 días hábiles del inciso 4 del artículo 14, porque el representante legal de la sociedad no dio respuesta al requerimiento 2019-03-001485.

Los anteriores casos, tienen la misma situación de hecho que ocurrió en este proceso con Promotora Aiki S.A.S., puesto que fueron solicitudes de insolvencia presentadas por acreedores, que durante el término de 30 días no contestaron al requerimiento y lo que trajo como consecuencia que se decretara la liquidación judicial de estas sociedades; la única diferencia es que para Promotora Aiki, la falta de respuesta durante los 30 días del requerimiento no trajo como consecuencia la liquidación judicial como indica la norma y fue aplicado en los 3 antecedentes mencionados de la propia intendencia regional, sino que conllevó a que se realizara un segundo requerimiento por un término de 10 días, que valga la pena volver a reiterar, **ese segundo requerimiento solo es para las sociedades que en efecto aportaron documentos pero que esos documentos no cumplen con los requisitos.**

Así las cosas, la Intendencia Regional Cali no solo aplicó de manera errada el artículo 14 de la ley 1116 de 2006 sobre el trámite de las solicitudes de insolvencia por acreedores, sino que adicionalmente desconoció los 3 antecedentes mencionados que tenían los mismos supuestos de hecho con Promotora Aiki y sin ofrecer justificación alguna, en el auto de admisión a reorganización de Promotora Aiki sobre las razones de porque se apartó de esos antecedentes, generando inseguridad jurídica para los acreedores.



Siendo ya evidente que la Intendencia Regional Cali con ese error le otorgó una prerrogativa que la norma no tenía para los deudores concursados, , **procedemos a exponer el segundo error procedimental , que consiste en que la** Intendencia Regional profiriera el Oficio 2023-03-005173 de fecha 10 de julio de 2023, **otorgándole un término de diez (10) días hábiles, a la Promotora Aiki para que presentara documentos para evaluar el inicio de un proceso de insolvencia empresarial,** durante ese término la sociedad, presentó por el “Modulo MI”, el cual es el aplicativo habilitado por la Superintendencia de Sociedades para radicar solicitudes de insolvencia, documentos e información requerida para el estudio de una solicitud de inicio de un proceso de reorganización, con la información financiera a corte 30 de junio de 2023, todo esto consta, en el radicado 2023-01-599388 de fecha 25 de julio de 2023.

La anterior presentación de documentos por el “Modulo MI”, la Intendencia Regional Cali la tomó como una contestación en término del requerimiento realizado en el Oficio 2023-03-005173 de fecha 10 de julio de 2023.

Por lo que es oportuno para evidenciar el segundo error procedimental, volver a traer a colación el último inciso del artículo 14:

“(…)Si la información allegada por el deudor no cumple dichos requisitos se le requerirá para que dentro de los diez (10) días siguientes los allegue al proceso. Si este requerimiento no se cumple, se ordenará la apertura del proceso de liquidación judicial u ordenará la remoción inmediata de los administradores.”

En gracia de discusión, si el segundo requerimiento se hubiese realizado en derecho, aunque ya se evidenció que fue un error, con la respuesta a ese segundo requerimiento la Intendencia Regional Cali en aplicación al artículo 14, debía resolver si admitía a un proceso de reorganización o decretaba el inicio de un proceso de liquidación judicial, partiendo del hecho que el aparato judicial como lo dijo la juez del Concurso en el Auto 2024-03-000353 de fecha 30 de enero de 2024, se movió con la solicitud de insolvencia de nosotros.

Sin embargo, muy a pesar que la norma solo habla de dos requerimientos uno por 30 días y otro por 10 días siempre y cuando se hubiese contestado al primero, la Intendencia Regional Cali comete un **tercer error procedimental** y emite un tercer requerimiento en el Oficio 2023-03-007091 de fecha 30 de agosto de 2023, indicando que una vez revisada la información presentada el 25 de julio de 2023 no estaba completa y requirió por tercera vez a la sociedad Promotora Aiki S.A.S. para que complementara la información presentada y le concedió nuevamente 10 días hábiles para que la presentara-

Teniendo en cuenta que el movimiento del aparato judicial inició con la solicitud de insolvencia de mi poderdante , como lo resalto la Intendencia Regional en el Auto 2024-03-000353 de fecha 30 de enero de 2024, para este momento ya se le habían hecho **3 requerimientos** y **otorgado dos términos de 10 días** a Promotora Aiki , lo cual no guarda consonancia con el artículo 14 de la Ley 1116 de 2006.



El deber ser de aplicación del artículo 14 cuando el inicio del proceso la solicita un acreedor, es que se realice un requerimiento por un término de 30 días, si durante ese término la sociedad contesta y aporta información y esta está incompleta, se deberá realizar un segundo requerimiento por un término de 10 días para que en ese tiempo la sociedad aporte lo faltante o cumpla con los requisitos que no cumplió y surtido este proceso, emita un Auto admitiendo a un proceso de reorganización o rechazando la admisión por carecer de los supuestos de insolvencia.

Pero contrario a lo anterior, en este punto de los hechos la Intendencia Regional Cali emitió un requerimiento por un término de 30 días, término durante el cual Promotora Aiki no contestó y, en lugar de decretar la liquidación judicial como los antecedentes de otras sociedades en la Intendencia Regional, emitió un segundo requerimiento por un término de 10 días, tiempo durante el cual, Promotora Aiki si bien contestó al requerimiento lo hizo de manera incompleta y, la Intendencia Regional Cali en lugar de emitir el correspondiente Auto admitiendo a un proceso de reorganización por el cumplimiento del lleno de los requisitos o decretando un proceso de liquidación como indica el artículo 14 por no cumplir con todos los requisitos, emite un tercer oficio otorgando por tercera vez un término en esta oportunidad de 10 días para volver a complementar información, término que en ninguna parte del artículo 14 se encuentra regulado.

Tan evidente era los efectos del artículo 14 sobre la declaratoria de una liquidación judicial para la sociedad Promotora Aiki, que en el ese segundo requerimiento en el Oficio 2023-03-005173 de fecha 10 de julio de 2023, se le advirtió a la sociedad que si no cumplía con el requerimiento se ordenaría la apertura del proceso de liquidación judicial o la remoción inmediata de los administradores.

Es decir, la propia Intendencia Regional de Cali aceptó en ese oficio que, si la información que se llegase a presentar en el segundo requerimiento no cumplía con el lleno de requisitos que exigía la norma, debían decretar la liquidación judicial, no obstante, como se procede a relatar esto no ocurrió y por el contrario se emitió un tercer requerimiento que la norma no tenía previsto.

Podríamos afirmar que ningún otra sociedad ha tenido tres requerimientos para presentar información financiera para decidir sobre el inicio de un proceso de reorganización o de liquidación judicial como ocurrió para este caso en concreto, y lo que es peor aún , ninguna sociedad ha contado con un término de 50 días hábiles para reunir la documentación necesaria para ser aceptado a un concurso recuperatorio, como paso en este caso sui generis.

Ahora bien, como consecuencia de este tercer requerimiento, la sociedad por medio del “Modulo Mi” radicó documentos en respuesta al requerimiento del oficio de fecha 30 de agosto de 2023, lo cual, consta en la radicación 2023-01-740795 de fecha 13 de septiembre de 2023.



En consecuencia de todo lo anterior, en el Auto 2023-03-008732 de fecha 18 de octubre de 2023 se resolvió por parte de la Intendencia Regional Cali admitir a la sociedad Promotora Aiki S.A.S. a un proceso de reorganización empresarial, cuando si se hubiese cumplido el procedimiento del artículo 14 se **debió decretar la liquidación judicial** de esta sociedad luego que la sociedad no contestara al Oficio 2023-03-002050 de fecha 17 de marzo de 2023 o en defecto, cuando luego del Oficio 2023-03-005173 de fecha 10 de julio de 2023 la información aportada no estuviese completa.

Luego del relato y la exposición de la norma, se pudo evidenciar que el proceso para emitir el Auto 2023-03-008732 de fecha 18 de octubre de 2023, en el cual, se decretó el inicio del proceso de reorganización, adolece de un mal procedimiento y por eso se debe acudir al Juez de Tutela para que se ordene nuevamente el estudio del procedimiento y con ello, analizar la declaratoria de liquidación judicial de la sociedad como en derecho procedía.

Por otro lado, en el Auto 2024-03-000353 de fecha 30 de enero de 2024 que resolvió la solicitud de adición y aclaración presentada por nosotros contra el Auto de fecha 18 de octubre de 2023, la Intendencia Regional Cali quiso excusar la emisión de tres requerimientos para que Promotora Aiki presentara la información para iniciar un proceso de reorganización, indicando que según los términos del numeral 11 del artículo 5 de la Ley 1116 de 2006, el Juez del Concurso tiene todas las atribuciones suficientes para dirigir el proceso y lograr que se cumplan las finalidades del mismo, sin embargo, vale la pena resaltarle al Juez del Concurso y al Juez de Tutela, que tener todas las atribuciones suficientes para dirigir y cumplir el proceso, no significa, que tenga la potestad para crear términos legales y alterar un procedimiento establecido en la Ley, como ocurrió para el caso en concreto.

Aunado a lo anterior, una situación hubiese sido que el procedimiento no tuviese un término y que el Juez bajo su potestad determine un término judicial, pero el procedimiento que debe agotar el operador judicial para el inicio de un proceso de insolvencia empresarial solicitado por un acreedor o deudor tiene **términos legales** que deben ser de obligatorio cumplimiento tanto por el Juez que la aplica como por las partes que participan en el proceso, pero muy a pesar de esta situación la Intendencia Regional de Cali otorgó un término no contemplado en la Ley.

Es así como la Corte Constitución en Sentencia C-012 DE 2002, ha señalado que tanto las partes procesales como las autoridades judiciales están obligadas a cumplir en forma exacta y diligente los plazos que la Ley consagra para la ejecución de las distintas actuaciones y diligencias en las diversas fases del proceso. Así pues, las partes tienen la carga de presentar la demanda, pedir pruebas, controvertir las allegadas al proceso, interponer y sustentar los recursos y, en fin, participar de cualquier otra forma en el proceso dentro de las etapas y términos establecidos en la ley, así como el juez y auxiliares de justicia tienen el deber correlativo de velar por el acatamiento de los términos procesales.



Y es que el cumplimiento de los términos establecidos en la Ley son el desarrollo del principio de seguridad jurídica que debe gobernar los procesos y actuaciones judiciales, lo cual ha sido planteado por la misma Corte Constitucional, corporación que ha señalado que los jueces no se pueden apartar como para el caso en concreto ocurrió, de los términos establecidos en la norma para un procedimiento porque esto genera inseguridad jurídica en los procedimientos y viola la norma que lo regula.

Por todo lo anterior, ha sido suficientemente ilustrado las razones por las cuales se generó un error procedimental y en lugar de decretar la liquidación judicial de Promotora Aiki se le otorgó 3 oportunidades para presentar documentos que trajo como resultado que se decretara la reorganización empresarial.

V. DE LA DECISIÓN SIN MOTIVACIÓN.

Contra el Auto 2023-03-008732 de fecha 18 de octubre de 2023, por medio del cual se admitió a Promotora Aiki a un proceso de reorganización empresarial, se presento una solicitud de adición y aclaración, para que la Intendencia Regional de Cali resolviera los tres (03) controles de legalidad que se propusieron, paralelos al procedimiento que se agotaba para definir sobre la admisión al proceso de insolvencia de la sociedad. Adicionalmente se requería que el despacho aclarara si la admisión al proceso de reorganización de la sociedad Promotora Aiki, se había dado como consecuencia de mi solicitud como acreedor.

Lo anterior, era de vital importancia para determinar dos escenarios:

- i. Si el inicio del proceso de reorganización había sido como consecuencia de nuestra solicitud como acreedor, eso indicaría que en efecto existió una violación al artículo 14 de la Ley 1116 de 2006, y en vez de realizar 2 requerimientos la Juez realizó 3 requerimientos o
- ii. Si el inicio del proceso de reorganización fue como consecuencia de la solicitud radicada por la sociedad en el Módulo MI el día 25 de julio de 2023 sin tener en cuenta mis solicitudes, entonces si bien se había cumplido con el procedimiento establecido en el artículo 14 haciendo 2 requerimientos, no habían resuelto mi solicitud como acreedor presentada desde el 9 de enero de 2023, situación que también era gravosa porque nosotros habíamos iniciado con el movimiento del aparato judicial primero y me estarían violando mi debido proceso como parte.

En consecuencia, en Auto 2024-03-000353 de fecha 30 de enero de 2024, la Intendencia Regional Cali resolvió rechazar las solicitudes de aclaración y adición propuestas, indicando varias cosas en la parte considerativa de la providencia que vale la pena resaltar:



1. En el numeral 3 de la parte considerativa, el Despacho indicó que en efecto la admisión al proceso de reorganización de la sociedad PROMOTORA AIKI S.A.S., que se resolvió en el Auto 2023-03-008732 de fecha 18 de octubre de 2023, se originó como consecuencia de la solicitud realizada por el acreedor a través de su apoderado.
2. Que razón por la cual, no nos asistía la razón cuando indicábamos que existieron dos solicitudes de admisión al proceso de reorganización empresarial de la sociedad, una por acreedor y otra por el deudor.
3. **Que no existía omisión alguna por parte del operador judicial en resolver sobre los 3 controles de legalidad propuestos que tenían como finalidad que el Despacho determinara la liquidación judicial por la no contestación del primer oficio de requerimiento, porque al haberse verificado los requisitos para la admisión al proceso de reorganización se constituía suficiente argumento contra esa pretensión.**
4. Finalmente, que los precedentes indicados por nosotros en los controles de legalidad donde luego del primer requerimiento se decretaron la liquidación judicial de las sociedad no tenía aplicación en éste asunto, porque no había línea de decisión uniformes sobre esta materia que obligaran a adoptar un único criterio interpretativo del artículo 14 de la Ley 1116 de 2006, por lo que la razón de fondo sobre la cual se cimienta el inicio del trámite concursal, es la verificación de cumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha según la información financiera y contable del deudor, aunado a reglas superiores como la primacía del derecho sustancial sobre el formal.

Y de lo planteado surge el acaecimiento del **segundo requisito específico para acudir a una acción de tutela** contra providencia judicial, porque el Auto 2023-03-008732 de fecha 18 de octubre de 2023 carece de motivación, dado que en ningún acápite ni de los hechos ni de la parte considerativa se hizo mención a los tres controles de legalidad presentados en este orden:

- En memorial 2023-01-575470 de fecha 13 de julio de 2023, solicitamos que se le hiciera un control de legalidad al trámite que adelantó la Intendencia Regional Cali, con mi solicitud presentada como acreedor de enero de 2023, toda vez que, apartándose de antecedentes que la propia Intendencia Regional Cali había resuelto, no decretó la liquidación judicial de PROMOTORA AIKI S.A.S., por no haber contestado en el primer requerimiento de 30 días otorgado con base en el artículo 14 de la Ley 1116 de 2006.
- En memorial 2023-01-647370 de fecha 14 de agosto de 2023, se reiteró la solicitud de control de legalidad y la apertura del proceso de liquidación judicial de la sociedad PROMOTORA AIKI S.A.S.



- En memorial 2023-01-771749 de fecha 26 de septiembre de 2023, nuevamente se reiteró la solicitud de control de legalidad y apertura del proceso de liquidación judicial de la sociedad PROMOTORA AIKI S.A.S.

Entonces, cuando el Despacho en el numeral 4 de la parte considerativa del Auto 2024-03-000353 de fecha 30 de enero de 2024, indica lo siguiente:

*“Ahora bien, con relación al control de legalidad cuya única finalidad es que el Despacho determine el inicio de la liquidación judicial de la sociedad deudora por la no contestación del primer oficio de requerimiento, **estima el Despacho que el hecho de haberse verificado los requisitos para la admisión al proceso de reorganización constituye suficiente argumento contra esa pretensión, y en ese sentido, no existe omisión alguna por parte de este operador.**”*

Esta materializando la falta de motivación de la decisión que emerge como vía de hecho.

Y es que la Intendencia Regional presumió que con la mera expedición del Auto 2023-03-008732 de fecha 18 de octubre de 2023, era suficiente argumento contra las pretensiones que realicé en los controles de legalidad, pero el verdadero problema es que si se revisa esa providencia, ni en los hechos ni en las consideraciones se hizo mención específica sobre mis 3 solicitudes de control de legalidad, por lo que si la Intendencia Regional Cali indica que en el Auto de fecha 18 de octubre de 2023 se resolvieron, esa providencia está carente de motivación, porque no tiene ni un solo argumento donde se resuelvan, puesto que ni siquiera en la parte resolutive se hizo mención.

Así pues, al defecto procedimental absoluto toca sumarle que la providencia esta carente de motivación respecto a los controles de legalidad propuestos, por lo que el Juez de Tutela debe ordenar a la Intendencia Regional de Cali que se resuelvan los 3 controles de legalidad.

Aunado a lo anterior, en el Auto 2023-03-008732 de fecha 18 de octubre de 2023 tampoco se indicó ninguna razón por la cual se apartó de los tres precedentes en los cuales, luego de no contestar al primer requerimiento de 30 días se decretó de manera directa la liquidación judicial, situación que merece un pronunciamiento de fondo, porque si bien es cierto que el Despacho puede dar interpretaciones distintas de sus posturas, es importante en virtud a la seguridad jurídica que si va a apartarse de tres precedentes que tienen en común con Promotora Aiki y cuál es la razón de la aplicación diferencial del precedente a esta sociedad concursada.

VI. DE LA VIOLACIÓN DIRECTA A LA CONSTITUCIÓN



Para este punto, es importante resaltar que el artículo 29 de la Constitución Política establece como derecho fundamental el debido proceso al que tienen derecho todas las partes en las actuaciones judiciales y administrativas, así como indica que los jueces deben resolver conforme a las leyes preexistentes.

Para el caso en concreto, es claro que el error procedimental absoluto es una violación al debido proceso que teníamos que la sociedad Promotora Aiki S.A.S. fuese decretada en liquidación judicial, porque luego de agotar el procedimiento del artículo 14 de la Ley 1116 de 2006 y luego de los 2 requerimientos que establece la norma, la consecuencia no era más que decretarla, debido a que la información presentada no cumplía con todos los requisitos para iniciar un proceso de reorganización.

Contrario a lo anterior, la Intendencia Regional de Cali no cumpliendo con el procedimiento, otorgó términos que la norma tenía establecido justificándolo en sus poderes de dirección del proceso, pero violando de manera directa la ley y el debido proceso que rige todas las actuaciones judiciales y que esta ampliamente justificada en los dos anteriores requisitos para presentar una acción de tutela contra providencia judicial.

Por todo lo anterior procedemos a solicitar lo siguiente:

VII. PRETENSIONES

1. Teniendo en cuenta que el trámite de esta acción de tutela afecta el proceso que adelanta la Intendencia Regional de Cali en el proceso de Promotora Aiki S.A.S., en los términos del artículo 7 del Decreto 2591 de 1991 **solicitamos como medida provisional la suspensión de los efectos del Auto 2023-03-008732 de fecha 18 de octubre de 2023**, hasta tanto se resuelva sobre esta acción de tutela, teniendo en cuenta que la solicitud de protección constitucional contenida en esta acción constitucional, tiene vocación aparente de viabilidad por estar respaldada en los hechos relatados y en razones jurídicas, así como la medida provisional de suspensión no genera un daño desproporcionado a la sociedad concursada ni a los acreedores.
2. Acceder a la acción de tutela y ordenar la revocatoria del Auto 2023-03-008732 de fecha 18 de octubre de 2023 en todas sus partes, por error procedimental absoluto para su expedición, por falta de motivación y violación directa a la constitución.
3. En consecuencia, ordenar a la Intendencia Regional Cali que decrete la liquidación judicial de la sociedad Promotora Aiki S.A.S., toda vez que, con los documentos aportados el día 25 de julio de 2023 no se cumplía con el lleno de requisitos para iniciar un proceso de reorganización empresarial y en su defecto se debía decretar la liquidación judicial de la sociedad en los términos del artículo 14 de la Ley 1116 de 2006.



VIII. PRUEBAS

Se solicita que se tengan como pruebas los siguientes documentos:

- I. Que se solicite copia de todo el expediente 80596 de insolvencia de Promotora AIKI S.A.S. y en especial, **copia de los siguientes documentos a los cuales no se tiene acceso como usuario:**
 1. Radicación 2023-01-007810 de fecha 11 de enero de 2023, por medio del cual se solicitó como acreedo el inicio del proceso de insolvencia.
 2. Oficio 2023-03-002050 de fecha 17 de marzo de 2023, por medio del cual la Intendencia Regional de Cali requirió por primera vez a Promotora Aiki S.A.S.
 3. Oficio 2023-03-005173 de fecha 10 de julio de 2023, por medio del cual la Intendencia Regional Cali requirió por segunda vez a Promotora Aiki S.A.S.
 4. Radicación 2023-01-599388 de fecha 25 de julio de 2023, por medio del cual Promotora Aiki S.A.S. contestó al requerimiento de fecha 10 de julio de 2023.
 5. Oficio 2023-03-007091 de fecha 30 de agosto de 2023, por medio del cual la Intendencia Regional Cali requirió por tercera vez a Promotora Aiki S.A.S.
 6. Radicación 2023-1-740795 de fecha 13 de septiembre de 2023, por medio del cual Promotora Aiki S.A.S. contestó al tercer requerimiento de fecha 30 de agosto de 2023.
 7. Auto 2023-03-008732 de fecha 18 de octubre de 2023, por medio del cual se admitió a Promotora Aiki S.A.S. al proceso de reorganización empresarial.
 8. Memorial 2023-01-853726 de fecha 25 de octubre de 2023, por medio del cual presentamos solicitud de adición y aclaración contra el Auto 2023-03-008732 de fecha 18 de octubre de 2023.
 9. Auto 2024-03-000353 de fecha 30 de enero de 2024, por medio del cual resolvieron las solicitudes de adición y aclaración.



10. Memorial 2023-01-575470 de fecha 13 de julio de 2023, por medio del cual se solicita el primer control de legalidad al procedimiento.
11. Memorial 2023-01-647370 de fecha 14 de agosto de 2023, en el cual se reiteró la solicitud de control de legalidad y se solicita la apertura del proceso de liquidación judicial de la sociedad Promotora Aiki S.A.S.
12. Memorial 2023-01-771749 de fecha 26 de septiembre de 2023, en el cual, por tercera vez se reitera la solicitud de control de legalidad y se solicita la apertura del proceso de liquidación judicial de Promotora Aiki S.A.S.

IX. JURAMENTO

Manifiesto que no se ha interpuesto otra acción de tutela por los mismos hechos y pretensiones escritas en ésta acción.

X. NOTIFICACIONES

El Suscrito y mi prohijado pueden ser notificado en la Calle 15 Norte # 6n34 Oficina 403 Edificio Alcazar de la ciudad de Cali.

Correo Electronico - Notificación electrónica: ja@agudeloabogados.com

La entidad accionada las recibirá en la Calle 10 # 4-40, Segundo Piso, Edificio bolsa de Occidente.

Correo Electrónico - Notificación electrónica: webmaster@supersociedades.gov.co

JULIAN DAVID AGUDELO PATIÑO
C.C. No. 1.151.943.015 de Cali
T.P No. 247.962 del C. S. de la J.